



## **RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010019985 DEL 10/06/2014**

### **POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN**

#### **EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

#### **CONSIDERANDO:**

##### **I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de Rondón, del departamento de Boyacá, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

##### **II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010009035, del 31 de marzo de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de Rondón, departamento de Boyacá, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:

---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

a. Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

### **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010009035 del 31 de marzo de 2014**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010009035, del 31 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de Rondón, del departamento de Boyacá, mediante el oficio No. SSPD 20144010177251, del 31 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 3 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

El día 9 de abril de 2014 el representante legal del municipio, señor Sandro Rodolfo Borda Rojas, compareció a notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20144010009035 del 31 de marzo de 2014.

Ahora bien, el señor Sandro Rodolfo Borda Rojas, en su calidad de alcalde del municipio de Rondón, del departamento de Boyacá, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290204312 del 25 de abril de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010009035 del 31 de marzo de 2014.

## **III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de Rondón, del departamento de Boyacá, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290204312, del 25 de abril de 2014, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

### **3.2 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

*"El municipio de Rondón fue descertificado por el presunto incumplimiento del requisito 6 relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA en razón a que se cargó equivocadamente el Acuerdo Municipal No. 013 del 26 de mayo de 2009, mediante el cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, sin tener en cuenta que éste no era el acto administrativo que aplicaba para la vigencia 2013 ya que la administración municipal expidió el 31 de mayo de 2013 la resolución No. 48 "Por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Rondón" en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución CRA 271 de 2003.*

(...)

### Fundamentos de Derecho

Como fundamentos de derecho invoco los artículos 501 ss. Del Código Contencioso Administrativo, además de las siguientes normas los artículos 3 y 5 del Decreto 1639 de 2013 y la resolución CRA 271 de 2003:

**"Entidad tarifaria local.** Es la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a cobrar en un municipio para su mercado de usuarios.

De acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, son entidades tarifarias locales:

a) El alcalde municipal, cuando sea el municipio el que preste directamente el servicio, o la Junta a que hace referencia el inciso 6° del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

b) La junta directiva de la persona prestadora, o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en sus estatutos o reglamentos internos, cuando el responsable de la prestación del servicio sea alguno de los prestadores señalados en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

En ningún caso, el concejo municipal es entidad tarifaria local, por lo tanto, no puede definir tarifas."

### PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO – BUENA FE EXCENTA DE CULPA

#### SOBRE LA DECISIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

El artículo 83 de la Constitución política prevé que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". En tal sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C- 023/98, referencia Expediente D-1745, Magistrado Ponente Dr. JORGE ARANGO MEJÍA, señala:

"El artículo 83 se refiere expresamente a las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas, y que tales relaciones, en lo que a la buena fe se refiere, están gobernadas por dos principios: el primero, la obligación en que están los particulares y las autoridades públicas de actuar con sujeción a los postulados de la buena fe; el segundo, la presunción, simplemente legal, de que todas las gestiones de los particulares ante las autoridades públicas se adelantan de buena fe". Lo anterior permite ver el error en que incurrir quienes pretenden aplicar el artículo 83 a la relación procesal, para llegar a la conclusión de que la exigencia de las pruebas es inconstitucional o que lo son los requisitos de tales pruebas. No: en el proceso hay tres sujetos: el juez y las partes. Entre estas últimas se da una relación indirecta, por intermedio del juez ante quien ellas exponen sus pretensiones y los correspondientes medios de defensa. Pero en esa relación indirecta entre el demandante y el demandado no puede dársele una particular eficacia al artículo 83, porque, sencillamente, el uno y el otro están en un plano de igualdad en lo relativo a la buena fe: ésta se presume en ambos. Pero, aun aceptando que el artículo 83 fuera aplicable a los procesos, habría que concluir que la presunción de buena fe de los particulares nada nuevo le agregaría, no solo porque tal presunción siempre ha existido, sino porque ella se predica tanto del actor como del demandado, y no libera de la carga de la prueba al primero en relación con sus pretensiones ni al segundo en lo que atañe a las excepciones que proponga." (Comillas, Negritas y Subrayas fuera de texto).

Corolario con lo anterior, se puede afirmar que la buena fe se debe predicar en cada una de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto frente al caso sub-examine se debe aplicar dicho principio respecto de la situación referente al hecho de cargar equivocadamente los documentos que suportaban el acto de aprobación de tarifas que correspondía a la vigencia 2013 a la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Sistema único de Información de Servicios Públicos SUI – cargue masivo, teniendo en cuenta que fue un error involuntario y prueba de ello es que la Resolución No. 048 " Por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Rondón" fue expedida desde el día 31 de mayo de 2013, por lo que en aplicación del principio de la Buena Fe,

debe entenderse que por error involuntario se cargó dentro del término el acto administrativo equivocado.

### CAPITULO III. PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL

El artículo 228 de la Constitución Política expresa que "la Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (Subrayado fuera del texto).

Al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T-006, de mayo 12/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Garante del respeto y efectividad de los derechos señala:

"Una jurisprudencia evolutiva, abierta al conocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas del país y consciente de la necesidad de estimular la progresiva y firme instauración de un orden justo, asentado en el respeto y efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos, es la única que se concilia con el estado social de derecho. Como corolario del principio de efectividad, elemento esencial del estado social de derecho, el artículo 228 de la constitución política, ordena que en las decisiones judiciales prevalecerá el derecho sustancial. No existe un derecho más sustancial que el consagrado en la propia constitución cuando se ocupa de definir los diferentes derechos. Esa disposición debe interpretarse como una de las más preciosas garantías de la protección de los derechos y brinda la prueba inconcusa de su pleno valor normativo." (Comillas, Negrillas y Subrayas fuera de texto).

De igual forma, ésta misma Corporación, ha manifestado en reiteradas oportunidades lo siguiente:

"En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, "prevalecerá el derecho sustancial". Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228." (Comillas, Negrillas y Subrayas fuera de texto).

En el caso objeto de la presente litis, se analiza que debe primar el derecho sustancial sobre el procesal, es decir, el derecho sustantivo sobre el adjetivo ó en otras palabras los principios que desarrollan el Estado Social de Derecho sobre el estado de derecho o la mera legalidad por cuanto el fin último de la norma es garantizar que no se vulneren derechos de los asociados prevaleciendo la equidad como lineamiento de la proporción igualitaria de derechos en contraposición al medio como forma procesal de legalidad sin tener en cuenta este fin último que para el caso sub-lite equivale a que la situación administrativa sustancial, toda vez que tal y como aparece en el sistema único de Información de Servicios Públicos SUL- cargue masivo se cargó dentro del término el acto de aprobación de tarifas pero por un error involuntario de buena fe exenta de culpa se cargó el acuerdo municipal que no correspondía a la vigencia a certificar, situación donde debe primar lo sustancial que era cumplir con el requisito legal al expedir el alcalde municipal como autoridad tarifaria local el acto de aprobación de tarifas y no la mera formalidad de reportarlo."

#### 3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado No. SSPD 20145290204312, del 25 de abril de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegó la siguiente prueba:

3.3.1. Resolución No. 048 del 31 de mayo de 2013, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Rondón.

El anterior documento, en su valor integral, se anexa al expediente.

#### IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

##### 4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

Argumenta el impugnante, que debido a un "error involuntario", el municipio cargó en el formato habilitado para el acto de aprobación de tarifas, el Acuerdo Municipal No. 013 del 26 de mayo de 2009, siendo que en el mes de mayo de 2013 se expidió la Resolución No. 048, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Rondón.

De otra parte, el recurrente, insta a esa entidad, para que observe a la hora de resolver el presente asunto, los principios de buena fé exenta de culpa y la primacía del derecho sustancial sobre el procesal.

Al respecto, se procedió a revisar el Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI, que el municipio cargó el día 21 de agosto de 2012, el Acuerdo Municipal No. 013 del 26 de mayo de 2009, mediante el cual se fijan las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo, el mencionado Acto Administrativo no fue tenido como válido dentro del proceso de certificación que nos ocupa, habida cuenta de que el Concejo Municipal no se constituye como entidad tarifaria local, según lo preceptuado en el artículo primero de la Resolución 271 de 2003 emitida por la CRA. A continuación se adjunta imagen del reporte y el Acuerdo:

Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI		aseo						
República de Colombia		consulta de información						
Formato/Comercio/Información PDF-TIFF								
(Para formato HTML) N° Registros en pantalla: todos		Generar reporte en formato: XLS HTML PDF CSV						
Departamento	BOYACA							
Municipio	RONDÓN							
Empresa	MUNICIPIO DE RONDÓN							
Formato	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD 15003 de 2009)							
Información PDF-TIFF								
Departamento	BOYACA							
Municipio	RONDÓN							
Empresa	MUNICIPIO DE RONDÓN							
Formato	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD 15003 de 2009)							
ID_EMPRESA	EMPRESA	FORMATO	ARCHIVO	ESTADO DEL CARGUE	PERIODICIDAD	AÑO DE REPORTE	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CERTIFICACIÓN
21203	MUNICIPIO DE RONDÓN	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD 15003 de 2009)	TARIFAS RONDÓN.pdf	Certificada	Anual	2009		2012-06-21
21203	MUNICIPIO DE RONDÓN	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD 15003 de 2009)	TARIFAS RONDÓN.pdf	ND	Anual	2011		2012-06-21
21203	MUNICIPIO DE RONDÓN	Acto de aprobación de tarifas -pdf o tiff. (Formato 7 de la Resol. SSPD 15003 de 2009)	TARIFAS RONDÓN.pdf	ND	Anual	2012		2012-06-22

No obstante lo anterior, el municipio allegó como prueba con el recurso de reposición, la Resolución No. 048 del 31 de mayo de 2013, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Rondón, acto que fue expedido por la entidad tarifaria local competente antes de la fecha máxima de cargue, esto es, antes del 30 de agosto de 2013, plazo fijado por el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, además, el municipio realizó el reporte en el SUI del "Acto de aprobación de tarifas" dentro del término antes mencionado, razón por la cual el criterio relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, se tiene por cumplido.

Finalmente, respecto del argumento del señor alcalde de Rondón, referente a observancia de la buena fé y de la primacía del derecho sustancial sobre el procesal, es necesario poner de presente, que esta superintendencia en cada actuación que desempeña, vela por la aplicación no solo de las normas que rigen su ejercicio sino también de los principios constitucionales y legales que se deben observar en toda actuación administrativa; sin embargo, siguiendo los lineamientos que gobiernan el presente asunto, no puede tener como válidos aquellos documentos que la Ley no contempla para acreditar uno u otro criterio, pero sí puede, en virtud del numeral 11 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, que consagra el principio de eficacia, analizar casos específicos, que dados supuestos

---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

facticos especiales pueden satisfacer lo dispuesto por la norma, como sucedió en el caso concreto, con el requisito referente a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, el cual a la luz de lo que reposa en el SUI, y lo allegado por el municipio con el recurso, se tuvo como válido.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Sandro Rodolfo Borda Rojas, como alcalde municipal de Rondón, prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se revoca.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR** la Resolución No. SSPD 20144010009035 del 31 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- CERTIFICAR** al municipio de RONDÓN, departamento de BOYACÁ, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

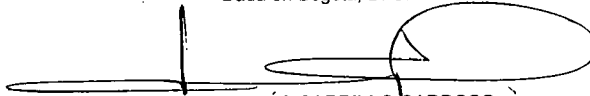
**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de Rondón, departamento de Boyacá, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de Boyacá, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO QUINTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**  
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo- Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información  
Visto Bueno: Lida Ruiz Vázquez- Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Expediente: 20094011566780284A